

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 9º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-21019-2019
CARATULADO : PFAFF/EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A

Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En presentación de 1 de julio de 2019 comparece don Jorge Ríos Ibacache, abogado, domiciliado en paseo Huérfanos N°1.160, oficina 1.208, comuna de Santiago, en representación convencional de doña Marcela Pfaff Nash, licenciada en antropología, domiciliada en Calle La Capitanía N°978, departamento 203, Las Condes, demandando en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, por responsabilidad civil extracontractual y legal a Express de Santiago Uno S.A., del giro transporte de pasajeros, representada por don Cristian Saphores Martínez y/o don Edgar Macallister Braydy, ignora profesión u oficio, domiciliados en Camino El Roble N°200, ENEA, comuna Pudahuel; y, a don Carlos Rodrigo Troncoso Hernández, ignora profesión u oficio, domiciliado en pasaje Rancagua N°1231, Población El Castillo, comuna de Peñaflor.

Indica que el 11 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 14:15 horas, su representada, de entonces 20 años de edad, conducía su bicicleta marca Norco, color blanco, con su casco de seguridad, por avenida Apoquindo dirección al oriente por la acera pegada a la vereda sur, entre las calles Tobalaba y avenida el Bosque Sur, cuando fue embestida por el bus del Transantiago, placa patente WB2459, marca Volvo, modelo B9 SLA, año 2006, perteneciente a la empresa Express de Santiago Uno S.A., lanzándola a la acera en donde quedó inconsciente por aproximadamente 30 minutos.

El conductor del bus de locomoción colectiva no prestó ayuda y sin importarle la gravedad de las lesiones huyó del lugar, siendo los transeúntes quienes procedieron a prestar los primeros auxilios.

El mismo conductor, al no estar atento a las condiciones del tránsito, no respetó el derecho de paso de la víctima, obstruyendo su normal desplazamiento en bicicleta por la calzada, lo que provocó que ella perdiera el control y cayera al pavimento, golpeándose la cabeza con la calzada.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ERLXFXZFJM

Como consecuencia de ello y debido a la fuerza del impacto, la víctima debió ser trasladada de urgencia a la Clínica Alemana, para recibir atención por la gravedad de sus lesiones, diagnosticándosele un “traumatismo encéfalo craneano, contusión de codo, erosión de piel”; lesiones de carácter menos grave, que la tuvieron hospitalizada varios días.

Agrega que el conductor del bus, don Carlos Rodrigo Troncoso Hernández, cuyo propietario era Express de Santiago Uno S.A., infringió una serie de normas, a saber, los artículos 148, 170, 172 y 174 de la Ley de Tránsito, los que cita.

En este caso, el propietario del vehículo es la empresa demandada, Express de Santiago Uno S.A. y el conductor del mismo, don Carlos Rodrigo Troncoso Hernández.

El fundamento de la responsabilidad solidaria entre ambos radica sobre todo en que el vehículo en circulación es un elemento peligroso para todos y el riesgo lo introduce el dueño del aparato, Express de Santiago Uno S.A.

Adicionalmente, refiere los artículos 1437, 2284 y 2314 del Código Civil, señalando que en la especie se está frente a un cuasidelito civil, pues ha existido un descuido, negligencia, falta de por parte de los demandados, en las calidades señaladas, siendo el daño producido consecuencia de ello.

Refiere además el artículo 2329 del Código Civil y agrega que dicha norma no puede interpretarse como una repetición inútil del artículo 2314 del mismo texto, sino que constituye una presunción general de culpabilidad.

A raíz de los hechos que motivan su demanda, su representada ha sufrido un serio daño, moral y también material, perjuicios que deben ser indemnizados en su totalidad.

Agrega que en la especie se está en presencia de un ilícito del cual deben responder los civilmente responsables, es decir, todos los demandados, según lo dispuesto por el artículo 2320 del Código Civil.

El chofer del bus era un dependiente civil, directo o indirecto de la empresa demandada. El fundamento de esta responsabilidad radica en que quien tiene bajo su cuidado a una persona que causa un daño, ha faltado



negligentemente al cuidado que debía observar, faltando al deber de vigilancia que sobre él debía ejercer en forma constante.

El deber de vigilancia que era exigible a Express Santiago Uno S.A. respecto de su dependiente, chofer del bus, era absoluto, constante y activo, para evitar que causara daños; y, si estos se produjeron, es porque aquella faltó al deber de elección, cuidado y vigilancia, que pesaba sobre aquel.

El inciso 1º del artículo 2320 contiene un precepto general aplicable a todo el que tenga a otra persona a su cuidado. Desde luego el jefe superior, labor que desempeñaba Express de Santiago Uno S.A., estaba obligado a cuidar constantemente de las labores encomendadas al conductor, por lo que no cabe duda que incurrió en la culpa in eligendo y también in vigilando.

En relación a la culpa, en la responsabilidad civil extracontractual, se debe tener presente que en esta materia la culpa no admite graduación: toda falta de diligencia o cuidado, por levísima que sea, engendra responsabilidad.

Refiere el artículo 2320 del Código Civil y agrega que el fundamento de responsabilidad para el caso de autos, es la culpa del empresario, en este caso, de la falta de vigilancia en que se presume ha incurrido. Si el empresario está obligado a velar porque sus dependientes no causen daños y a tomar las medidas necesarias al efecto, puesto que los encargados de la manutención de los recursos a utilizar y demás accesorios se hallaban bajo sus órdenes y dirección, es porque esa vigilancia no se ejerció en debida forma o las medidas adoptadas por la empresa demandada fueron insuficientes.

Por su parte, lo que caracteriza al dependiente es el hecho de ser subalterno de otra persona, prestar sus servicios bajo la autoridad u órdenes de otro. Dicha calidad no proviene de la forma en que fue designado como tal, sino del hecho de encontrarse al servicio de otro.

Cita además el artículo 2322 del Código Civil y agrega que a la empresa demandada no le bastará probar que le fue difícil prever o impedir que sus dependientes actuaran de un modo impropio, sino que deberá acreditar que le fue imposible moral y materialmente prever o impedir dicha actuación. Tampoco basta con probar que la contraria instruye y



vigila a sus dependientes, porque si a pesar de ello, estos comieron hechos ilícitos, dichas medidas son insuficientes y/o desobedecidas, sin que concurra, el propósito de evitarlos que tiene el empleador.

En cuanto a los perjuicios experimentados por su representada, requisito indispensable de la responsabilidad civil, señala los siguientes:

- Patrimonial: Su representada sufrió lesiones y sufrimiento físico, debiendo someterse a reiteradas terapias para recuperar su estado de salud. Además, mantiene un dolor permanente en sus articulaciones, que le impide realizar actividades cotidianas.

Este concepto corresponde al dolor físico experimentado por la víctima de un accidente. Al efecto, cita la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 6 de octubre de 1992, en el proceso Rol N°128.087, que distingue entre el daño moral y el sufrimiento físico, ordenando indemnizar ambos perjuicios por separado.

Por el ítem de sufrimiento físico, demanda la suma de \$10.000.000.-

Además, debido al accidente su representada debió incurrir en una serie de gastos médicos y terapias, cuyo monto asciende a \$10.000.000.-, el que demanda.

Por los gastos médicos se demanda la suma de \$10.000.000 y por el sufrimiento físico sufrido la suma de \$10.000.000.

- Moral: La demandante sufrió un perjuicio injusto, cuya suma es de difícil determinación, toda vez que el accidente le provocó un trastorno en su calidad de vida, dolor, angustia, desesperación, menoscabo espiritual, psíquico y físico.

Padeció de una profunda depresión, que le ha producido una serie de afecciones físicas y psicológicas. Además, ha dejado de realizar actividades que le eran cotidianas, producto del estrés post traumático, limitando su diario vivir, por el temor de sufrir otro accidente. Adicionalmente, las secuelas por las lesiones físicas y síquicas le impiden realizar sus actividades deportivas y académicas en forma normal. Por lo anterior, demanda por este concepto la suma de \$50.000.000.-

Solicita en definitiva: se condene a los demandados a pagar a la demandante, en forma solidaria o simplemente conjunta, por concepto de indemnización de perjuicios, la suma de \$70.000.000.- más intereses y



reajustes legales, calculados a partir de la fecha del siniestro, el 11 de septiembre del 2015, con costas.

En presentación de 1 de octubre de 2019 la demandada Express contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas.

Niega y controvierte la ocurrencia del accidente imputado y los hechos e imputaciones en la forma descrita por la demandante, salvo aquellos que reconozca formal y expresamente, pesando sobre la actora probar conforme a derecho, la veracidad y exactitud de los mismos respecto de su representada, según lo dispuesto en los artículos 1698 y 2314 ambos del Código Civil.

La actora expresa que mientras conducía su bicicleta por “la acera” habría sido impactada por el bus PPU WB2459, es decir, este habría ingresado a la acera, esto es, “la parte de la vía destinada al uso de peatones”, según la definición legal del artículo 2 de la Ley N°18.290, cuestión que niega.

Sin perjuicio de lo anterior, ello supone necesariamente que la actora transitaba en un lugar no habilitado para la circulación de bicicletas, pues la acera es un lugar para el tránsito exclusivo de los peatones, como dispone la Ley de Tránsito.

No obstante lo señalado por la demandante y suponiendo un error en la redacción del libelo, respecto de la circunstancia de encontrarse transitando por la acera y suponiendo que lo hacía por la calzada, en el sector indicado por la demandante, esto es, avenida Apoquindo dirección al oriente entre las calles Tobalaba y El Bosque, el sector sur de dicha vía, corresponde y correspondía al momento del accidente a un sector exclusivo para el transporte público, según lo dispone la Resolución Exenta N°462 de 28 de febrero de 2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por lo que si la demandante se encontraba en dicho sector, lo hacía de forma antirreglamentaria.

En efecto, si señala habría sido “lanzada” a la acera sur, esto implica necesariamente que se encontraría transitando por el sector demarcado exclusivamente para el transporte público, según se encontraba señalado en la calzada al momento de los hechos.



Sin perjuicio de todo lo anterior, no les constan los hechos relatados en la demanda, siendo exclusiva carga de la demandante acreditar cada una de sus aseveraciones.

Como alegaciones, excepciones y defensas, argumenta:

- No existe sentencia penal o infraccional dictada en contra del conductor del vehículo, don Carlos Rodrigo Troncoso Hernández, por vulneración a la Ley de Tránsito, conforme al artículo 165 de la Ley de Tránsito, por lo que no puede perseguirse la responsabilidad civil del propietario del mismo, al tenor del artículo 169 de la misma ley.

De este modo, el único régimen por el cual se puede accionar en contra de su representada es el común por responsabilidad extracontractual de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

- Ausencia de responsabilidad por no configurarse los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual.

La contraria no realiza ninguna imputación de responsabilidad precisa o concreta respecto de su representada, remitiéndose genéricamente al estatuto de responsabilidad extracontractual, debiendo aquella acreditar cada uno de sus elementos configuradores, entre ella la supuesta culpa o dolo de los demandados.

Ahora bien, de acuerdo a los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, para ser civilmente responsable desde un punto de vista extracontractual y ser obligado a reparar el mal causado, es necesario que concurren ciertos requisitos de manera copulativa:

- 1.- Existencia de una acción u omisión de parte del infractor. Sin embargo, la actora no ha señalado cómo se configuraría la acción u omisión culposa o dolosa de su parte y solo se ha referido vagamente a la conducta que habría tenido el supuesto conductor del bus, cuestión que deberá acreditar, de modo que permita entender por qué dicha conducta falta al debido cuidado, o puede representar una acción dolosa o culposa que a su vez pueda constituir causa basal del supuesto accidente que alega.

Asimismo, en el caso no hay hechos culpables respecto de su representada, que no ocasionó ni contribuyó al accidente sufrido por la actora. Tampoco sus vehículos se encontraban en un estado deficiente o inseguro.



2.- Dicha acción produzca daño en la persona o propiedad de otro, respecto de lo cual se referirá más adelante.

3.- La acción que causa daño debe ser imputable a dolo o culpa del infractor. Sin embargo, no es posible imputar a su parte una conducta dolosa o culposa en los hechos.

Refiere el artículo 44 del Código Civil y agrega que su representada no actuó dolosamente, pues no tuvo participación, ni tuvo la intención de producir injuria en contra de la persona o propiedad de la demandante. Tampoco ha incurrido en aquella falta de diligencia y cuidado, cumpliendo cabalmente con la normativa legal pertinente.

4.- Relación de causalidad entre el dolo o culpa y el daño causado. En efecto, al no haber una conducta reprochable, tampoco se configura la relación de causalidad necesaria para demandar civilmente daños y perjuicios.

- En subsidio, alega el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

Los antecedentes del caso permiten tener por acreditado que la única responsable del accidente fue la víctima, quien presuntamente habría circulado por un sector destinado exclusivo de transporte público, sin motivo aparente, todo esto según su propia versión de la demanda, lo que hace plena prueba en su contra de esta y da cuenta de que su conducta era antirreglamentaria.

La culpa exclusiva de la “víctima-demandante” exonera completamente de responsabilidad al demandado, pues de haber observado el celo y cuidado mínimo de un ser racional con aversión al riesgo, no se habrían verificado los hechos materia de autos.

La conducta de la víctima se aprecia en base a un criterio in abstracto, en comparación con el comportamiento que habría observado, en las mismas circunstancias un individuo medianamente prudente y avisado.

A la larga, no se trata sino de la obligación de actuar prudentemente, como un buen padre de familia lo haría; o si se quiere, del principio de que nadie puede valerse de su propia negligencia para obtener provecho de ella, de modo que si la causa del daño invocado ha sido la conducta de la demandante, no se ve cómo podría hacerse responsable a su parte de ello.



- En subsidio, alega que se configuraría un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, dado que atendidas las circunstancias el incidente corresponde a un imprevisto imposible de resistir para su representada, debiéndose eximirla de responsabilidad en los hechos alegados.

El accidente, de haber ocurrido, se suscitó por razones imprevistas para su parte y que no fueron posibles de resistir, esto es, que la demandante no tomó los recaudos necesarios a la hora de abordar un bus del transporte público (sic).

Esta eximente se funda en dos cuestiones esenciales. Primero, su representada cumplió con la mantención adecuada de los buses y capacitación de su personal. Segundo, la causa del accidente se encuentra en la conducta de la propia víctima, según se ha expuesto.

Además, el supuesto accidente materia de este juicio -de ser efectivo- ocurrió en la vía pública, completamente ajeno a la órbita de control de su representada y por la conducta negligente de la propia víctima.

En cuanto al supuesto daño reclamado, efectúa las siguientes alegaciones:

- Las excepciones, eximentes y defensas que ha expuesto son suficientes para rechazar la demanda, por no cumplirse los elementos que contempla la ley para dar lugar a la responsabilidad extracontractual.

- Es obligación de la demandante acreditar los daños reclamados, respecto de los cuales su parte controvierte y desconoce la existencia, entidad, naturaleza y monto.

- En su relato la demandante señala que luego del accidente se dirigió a la Clínica Alemana, siendo diagnosticada con un “Traumatismo encéfalo craneano, contusión de codo, erosión de piel”. Tanto la atención como dicho diagnóstico no consta a su parte, por lo cual los controvierte, siendo carga de la demandante acreditarlo. Además, la demandante debe acreditar que utilizaba los elementos de seguridad reglamentarios para circular en bicicleta.

- En cuanto al daño emergente alegado, en el cual la demandante agrupa dos conceptos disímiles -el supuesto gasto médico y el sufrimiento físico- señalada que niega ambos conceptos, por no constarle. Además, aun



en el caso de ser efectivo el supuesto sufrimiento físico, este ítem debe entenderse necesariamente incorporado en el acápite del daño moral, nunca en el daño emergente o patrimonial, ya que éste corresponde a las mermas efectivas en el patrimonio de la demandante manifestadas mediante egresos que habría realizado la actora.

Con todo, acreditar los montos solicitados son de exclusiva carga de la demandante.

- Sobre el daño moral, el monto pedido por la demandante es infundado y debe ser igualmente acreditado.

Agrega que cualquier condena por dicho concepto no puede transformarse en una indemnización punitiva, lo que repugna nuestro sistema jurídico basado en la necesaria compensación del daño a la víctima del mismo, pero a la vez, sustentado en la negación absoluta del enriquecimiento sin causa.

El principio del resarcimiento íntegro del daño conlleva justamente la reparación total pero precisa de aquél. La víctima no puede recibir menos ni debe recibir más de lo que corresponde al daño efectivamente sufrido.

Por último, los montos solicitados son desproporcionados a los fallados por nuestra jurisprudencia, sobre todo considerando que la demandante no tiene ningún porcentaje de incapacidad, no señala por cuánto tiempo habría estado impedida de realizar sus actividades y no existe ningún antecedente plausible que acredite el supuesto sufrimiento de la actora.

En subsidio, para el evento que se estime que a su representada cabe algún grado de responsabilidad pecuniaria en los hechos en que se funda la demanda, solicita la aplicación del artículo 2330 del Código Civil para efectos de reducir la indemnización reclamada, atendido que la demandante se expuso en forma imprudente e innecesaria a sufrir los supuestos daños que refiere, atendido los antecedentes expuestos, lo que configura una eximente de responsabilidad o a lo menos debe ser considerada para reducir la desmedida indemnización reclamada.

En presentación de 11 de octubre de 2019 la demandante evacuó la réplica, ratificando lo expuesto en su demanda, señalando que la demandada pretende eludir su responsabilidad, negando la ocurrencia de los hechos, lo que se contradice con todos los antecedentes probatorios y la



investigación penal iniciada por el accidente. Además, intenta confundir al tribunal, expresando que su representada transitaba por la vereda, lo que no es efectivo.

La contraria afirma que la víctima cometió una infracción al transitar por una vía exclusiva para transporte público, de acuerdo a la Resolución Exenta N°462 de 28 de febrero de 2017 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero omite indicar que esta permite el tránsito por las mismas cuando se deba realizar una maniobra de viraje por el usuario, como hizo su parte.

Sobre la aplicación del artículo 169 (ex 174) de la Ley de Tránsito, indica que el accidente se produjo por la negligencia en la conducción del dependiente de la demandada, de lo que es responsable la empresa que se dedica al transporte de pasajeros, por lo que el artículo 169 citado respecto de la responsabilidad del propietario del móvil, debe ser interpretado como un antecedente que funda su obligación legal de reparar los perjuicios causados.

Para resolver la presente controversia se debe tener presente todo lo establecido respecto de la responsabilidad del propietario del móvil y las obligaciones de la demandada como empresa dedicada al transporte de pasajeros, así como las normas de responsabilidad por el hecho ajeno, del artículo 2320 del Código Civil. La responsabilidad del propietario del bus, que coincide con la empresa dedicada al transporte de pasajeros, deriva de distintas fuentes legales, todas las cuales solo les permite concluir que la demandada debe responder y reparar los perjuicios sufridos por la víctima.

Respecto de la culpa exclusiva de la víctima alegada por la contraria, debe tenerse presente que se permite el tránsito en un vía exclusiva para el transporte público cuando sea necesario para realizar un viraje. La actora no cometió infracción alguna, sino que fue desplazada por el vehículo de la locomoción colectiva, que no respetó su derecho preferente de paso.

Con todo, la supuesta infracción no tiene ninguna relación con la causa del accidente, el que se produjo debido al actuar del conductor del bus, que ni siquiera se detuvo para asistirle y abandonó el lugar, sin preocuparse de sus lesiones, lo que hace presumir su responsabilidad.



Dicha responsabilidad es total, y, por lo mismo, debe responder el propietario del bus, que también es su empleador desde el punto de vista civil.

Adicionalmente, la contraria no indica ninguna maniobra o acción de la víctima que se pueda considerar como causa del accidente, ni se hace cargo de las afirmaciones sobre las acciones y omisiones del conductor.

Agrega que en este siniestro no hubo caso fortuito, pues los supuestos antecedentes que a juicio de la demandada lo constituirían no tienen ninguna relación con los hechos del presente juicio, por lo que rechazarse esta excepción. No obstante, aquella acreditar que este fue imprevisto e irresistible.

Finalmente, respecto de los daños demandados, señala que su parte en la etapa probatoria acreditará los gastos médicos incurridos debido a las lesiones ocasionados por el accidente, quien debió ser atendida en la Clínica Alemana.

El daño emergente debe ser indemnizado por la demandada, pues tienen causa directa y necesaria en el accidente ocasionado por la demandada.

Por otro lado, la demandada indica que se debe probar el daño moral, lo que no es del todo efectivo, según lo resuelto por nuestros tribunales de justicia, ya que las graves lesiones sufridas por la actora hacen presumirlo. No obstante lo anterior, su parte también lo acreditará en la etapa de prueba.

Añade que en este caso se ha afectado la integridad de la demandante, provocando un daño moral. Si bien es difícil de cuantificarlo, no es menos cierto que según nuestra legislación, este es indemnizable.

Finalmente, sobre la exposición imprudente de la víctima, indica que también se insinúa de contrario que debería haber una reducción de la indemnización, según el artículo 2330 del Código Civil, por cuanto se expuso al daño, lo que no ocurrió. Además, la demandada no indica en qué consiste la supuesta imprudencia y como habría influido en la ocurrencia del accidente.

En presentación de 25 de octubre de 2019, la demandada Express de Santiago Uno S.A. evacuó la réplica, reiterando los argumentos vertidos en



su contestación y agregando que pese a los dichos de la demandada, nuestro derecho de daños, aplicable en la especie, se basa exclusivamente en la responsabilidad por culpa, sin que tenga cabida la objetividad de la responsabilidad.

Cuando el legislador ha querido establecer la objetividad, lo ha hecho de manera expresa y a modo de excepción a las reglas generales, que no es el caso de autos.

En Chile, con la salvedad de casos expresamente establecidos y especificado en la ley, el régimen de responsabilidad extracontractual es subjetivo basado en la culpa, indica citando al profesor Alessandri.

La legislación chilena vigente, cuyas disposiciones obligan tanto a las partes de este juicio como al mismo tribunal, es clara en señalar la forma de determinar la responsabilidad, debiendo necesariamente concurrir cada uno de los elementos que la misma ley exige.

Reitera la inexistencia de sentencia penal en contra del conductor del vehículo ni respecto del representante legal de su representada, lo que imposibilita la condena de responsabilidad solidaria civil en contra de esta última, por una infracción a la Ley N°18.290. En reiteradas ocasiones la jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido.

Además, y en el caso de existir una eventual condena respecto del codemandado y conductor del bus, la eventual responsabilidad del propietario de un vehículo es subjetiva, debiendo probarse entonces que este último incurrió en una acción u omisión dolosa o culpable que causó el daño.

Reitera además que no existió ninguna acción u omisión culpable de su representada, ni de sus dependientes y que en este caso no concurre ningún presupuesto de la responsabilidad extracontractual que se reclama, debiendo la contraria acreditar sus dichos y la supuesta negligencia o falta de cuidado que atribuye a su parte, especialmente en las infundadas imputaciones sobre una supuesta responsabilidad por el hecho ajeno.

Sobre el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, enfatiza que la propia demandante reconoció haber estado conduciendo en una manifiesta infracción a la Ley de Tránsito, al transitar



por una vía destinada exclusivamente a la circulación de buses del transporte público al momento del accidente que dice haber sufrido.

En su réplica intenta defender el actuar imprudente y antirreglamentario de la demandante, invocando una supuesta Resolución Exenta del Ministerio de Transportes que habría sido dictada 2 años después de los hechos de la demanda. Sin embargo, dado que ella constituye una excepción a la regla general, que actuaría como una eximente de la responsabilidad infraccional que confesó, corresponde a la actora probar la veracidad de las circunstancias que la habilitaron para transitar por una vía prohibida para su tipo de vehículo.

Así, el hecho de la víctima interrumpe la necesaria relación de causalidad en la imputación de la responsabilidad civil, eximiendo al demandado de esta.

Por resolución de 22 septiembre de 2020, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía del demandado Carlos Troncoso.

En presentación de 25 de septiembre de 2020, la demandante evacuó la réplica en relación al mencionado demandado, ratificando lo expuesto en su demanda.

Por resolución de 20 octubre de 2020, se tuvo por evacuada la réplica en rebeldía del demandado Carlos Troncoso.

El 2 de marzo de 2021 se efectuó audiencia de conciliación, la que no prosperó.

Por resoluciones de 28 de abril y 18 de octubre de 2021, se recibió la causa a prueba.

Por resolución de 6 de julio de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que comparece don Jorge Ríos Ibacache, en representación de doña Marcela Pfaff Nash, demandando de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual derivada de los daños sufridos producto del accidente ocurrido el 11 de septiembre de 2015, provocados por el bus del Transantiago placa patente WB2459, de propiedad de Express de Santiago Uno S.A. y conducido por don Carlos Troncoso Hernández, a quienes solicita se condene a pagarle, por su



responsabilidad solidaria, o en forma simplemente conjunta, la suma de \$70.000.000.-, más intereses y reajustes legales, calculados desde la fecha del accidente.

Los fundamentos de su acción se encuentran señalados en lo expositivo.

SEGUNDO: Que el artículo 1698 del Código Civil dispone que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o estas.”

TERCERO: Que para acreditar su pretensión, la demandante allegó la siguiente prueba documental:

- Acta de audiencia de control de detención del demandado don Carlos Rodrigo Troncoso Hernández, efectuada por el Juzgado de Garantía de Talagante el 15 de abril de 2020, de causa RIT 1.219-2020, RUC: 1500880646-K.

- Copia carpeta de investigación, correspondiente a la misma causa antes señalada, seguida por Fiscalía Local de Las Condes. En ella se observan, entre otras, las siguientes piezas de relevancia:

- i.- Parte denuncia N°6.122, efectuado por el padre de la demandante ante la 17ª Comisaría de Las Condes, el 12 de septiembre de 2015, por el cuasidelito de lesiones, ocurrido el día anterior, en avenida Apoquindo, intersección con avenida El Bosque Central, comuna de Las Condes. Se describen como lesiones sufridas por su hija: “traumatismo encéfalo craneano, contusión de codo, erosiones en la piel”. Además, como indicadores del accidente de tránsito, se indican que la demandante era la conductora, llevaba casco y en la relación de los hechos, se señala, entre otros, se trata de un accidente de tránsito lateral, por causas no determinadas, calzada bidireccional con bandejón, 3 pistas, estado de la calzada bueno.

Dado que la víctima se encontraba hospitalizada, un funcionario de Carabineros se dirigió al lugar, tomándole declaración y tomando nota de que la patente del bus entregada por transeúntes a su hermano sería la WB-2459, de propiedad de Express de Santiago Uno S.A.

- ii.- Informe médico de lesiones N°013858, de 12 de septiembre de 2015, correspondiente al Ministerio de Salud y emitido por Daniel Andrés



Cárcamo Pérez, Urgencia de Clínica Alemana de Santiago, para los efectos de los artículos 341, 315 y 322 del Código Procesal Penal, relativo a la víctima, señalando como diagnóstico “caída en bicicleta, traumatismo encéfalo craneano, contusión al codo, erosiones en la piel”, el que habría sido ocasionado por un microbús, cayendo al suelo. En el informe se señala que la apreciación clínica es concordante con el relato y se clasifican las lesiones como “menos graves”.

iii.- Orden de investigar, emitida el 28 de septiembre de 2015 por Lorena Parra Parra, Fiscal Adjunta de la Fiscalía de Las Condes, al Comisario de Bricim Las Condes de la Policía de Investigaciones, en la misma causa y por el cuasidelito de lesiones, artículos 490, 491 inciso 2 y 492.

iv.- Informe policial N°3640/00901, remitido por Valesca Mancilla Soto, Oficial Investigadora de la Policía de Investigaciones, a la fiscal antes mencionada, dando cuenta de diversas diligencias efectuadas y entregando como resultado de ellas, que tras un empadronamiento del sector del accidente, se puso establecer que el conductor del bus de Transantiago, se fue inmediatamente del lugar una vez que cometió el atropello.

v.- Querrella por cuasidelito de lesiones graves, interpuesta por doña Marcela Pfaaf Nash.

vi.- Diversas solicitudes de información por parte de Fiscalía a la empresa demandada Express de Santiago Uno S.A sobre el accidente investigado y su respuesta, de 3 de abril de 2018, comunicando que el conductor del bus ese día correspondía al demandado don Carlos Rodrigo Troncoso Hernández y que dicho bus no contaba con sistema de videograbación. Se hace presente además que aquel fue despedido de la compañía el 31 de diciembre de 2015, adjuntando finiquito.

vii.- Informe médico legal N°588-2018, relativo a la demandante y formulado el 19 de marzo de 2018 por el médico forense Ronald De La Cuadra Espinosa, del Servicio Médico Legal, en el cual tras examen físico se determina “sin lesiones, ni cicatrices ni limitaciones” y se concluye “lesiones atribuibles a golpe contuso por accidente de tránsito de pronóstico médico legal leve, que suelen sanar salvo complicaciones en 10-14 días con igual tiempo de incapacidad”.



viii.- Declaración del demandado don Carlos Rodrigo Troncoso Hernández, prestada el 3 de octubre de 2018 ante la Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Las Condes, en calidad de imputado en la señalada causa, quien en dicha oportunidad hizo uso de su derecho a guardar silencio.

ix.- Informe técnico pericial N°274-C-2019, efectuado por la Prefectura Investigativa de Accidentes de Tránsito de Carabineros de Chile, de 28 de mayo de 2018 y relativo al accidente de autos.

x.- Informe médico, efectuado el 29 de abril de 2019 por Daniel Cárcamo Pérez, quien certificó que en la evaluación en Servicio de Urgencia de la Clínica Alemana que hizo a la demandante, constató el diagnóstico traumatismo encéfalo craneano, con pronóstico reservado a ese momento y con la certeza de que la paciente no podría reincorporarse a su actividad habitual antes de 15 días, por lo que constató lesiones menos graves. A la fecha, presenta un examen neurológico normal y no presenta secuelas aparentes.

xi.- Declaración del testigo Daniel Alfredo Catalán Catalán, prestada el 7 de junio de 2019 ante Carabineros de Chile, quien señaló recordar que el año 2015 caminaba en compañía de su hermano por avenida Apoquindo vereda sur, frente al edificio Territoria, comuna de Las Condes y observó a una mujer que se desplazaba en bicicleta por avenida Apoquindo en dirección al Metro El Golf, apegada a la acera, cuando un bus del Transantiago se apegó demasiado a la ciclista, lo que ocasionó que cayera al piso, comenzando con convulsiones, por lo que junto a su hermano procedieron a prestarle primeros auxilios. Hizo presente que el conductor de la micro huyó del lugar.

- Informe médico emitido por Dr. Daniel Cárcamo Pérez, neurólogo, de fecha 29 de abril de 2019, respecto de la paciente Marcela Pfaff Nash. En el cual se expresa que tuvo un traumatismo encéfalo craneano el 11 de septiembre de 2015, que fue hospitalizada en Clínica Alemana de Santiago entre el 11 y 12 de septiembre y que pudo reincorporarse a su actividad habitual después de 3 semanas, tuvo un control neurológico que extendió el reposo y actualmente presenta un examen neurológico normal, no presentando secuelas aparentes.



- Informe psicológico, efectuado a la demandante el 12 de noviembre de 2021, emitido por la psicóloga doña Antonieta Pérez Hernández, que concluye que tras los años acontecidos desde el accidente, además de tener consecuencias físicas y neurológicas en el momento, presentó sintomatología afectiva significativa, que comprometió su estado afectivo, emocional, social, académico y relacional. Dentro de estas consecuencias, existen secuelas de índoles académicas, pues debió retomar sus estudios, aun con problemas de memoria, mientras cursaba el 2° año de la carrera de Antropología en la Universidad de Chile. Se da cuenta también que la demandante presenta hasta la fecha de la elaboración del informe un trastorno de ansiedad generalizada, resultado del accidente. Dicho síndrome tiene como principal sintomatología la sensación de inestabilidad emocional correlacionada a pensamientos rumiantes, existentes hasta el día de hoy, en momentos cuando se sube a una bicicleta. Además, ha sufrido episodios de ataque de pánico al subirse a ellas.

Finalmente, se señala que presenta secuelas síquicas compatibles con la presencia de daño psicológico debido al accidente, hecho que vivencia como un suceso traumático en su vida, las que han permanecido en el tiempo, generando una afectación en su vida y no se explican por otros eventos en la trayectoria de su vida.

- Certificado, emitido por el neurólogo Claudio Sacks Pinchevsky, el 19 de noviembre de 2021 en Viña del Mar, que da cuenta de haber evaluado a la demandante el 17 de septiembre de 2015, tras haber sufrido una caída mientras andaba en bicicleta, 7 días antes. Cursó pérdida de conciencia breve y autolimitada y con un evento convulsivo asociado. Indica que al momento de su evaluación, se encontraba en buenas condiciones generales, presentaba limitaciones de movilidad cervical. Se le diagnosticó un TEC cerrado, un episodio convulsivo único y un esguince cervical.

- Certificado de anotaciones vigentes del vehículo WB-2459, en el cual se puede apreciar que la empresa demandada es dueña del bus que participó en el accidente.

CUARTO: Que con el mérito de los documentos acompañados por la demandante, particularmente aquellos que constan en la carpeta



investigativa seguida por la Fiscalía de Las Condes, puede tenerse por acreditado que:

1° El 11 de septiembre de 2015, mientras circulaba en su bicicleta y proveída de los implementos de seguridad necesarios para ello, por avenida Apoquindo, hacia el oriente por la calzada sur, pegada a la acera, antes de llegar a la intersección con avenida El Bosque, fue embestida por el bus del Transantiago placa patente WB2459, conducido por el demandado Carlos Troncoso Hernández y de propiedad de la demandada Express de Santiago Uno S.A.

2° Posterior al accidente, el mencionado conductor abandonó el lugar del accidente, sin prestar ayuda a la demandante, quien fue auxiliada por personas que se encontraban en el sector.

3° La Clínica Alemana de Santiago, donde fue atendida, la diagnosticó con “traumatismo encéfalo craneano, contusión al codo, erosiones en la piel”.

QUINTO: Que en lo que toca a la responsabilidad que se le imputan al demandado Carlos Troncoso Hernández en los hechos, cabe señalar que este se mantuvo en rebeldía durante el curso del juicio y se le tuvo por confeso de la circunstancia de ser efectivo que el día y en el lugar del accidente, mientras conducía el bus de propiedad de la empresa demandada, embistió a la demandante, quien circulaba en su bicicleta, por no encontrarse atento a las condiciones del tránsito y sin respetar su derecho de paso preferente, huyendo del lugar sin prestarle auxilio.

SEXTO: Que el N°2 del artículo 167 de la Ley de Tránsito dispone que constituye una presunción de responsabilidad del conductor, el “no estar atento a las condiciones del tránsito del momento”.

SÉPTIMO: Que de acuerdo a lo antes señalado y teniendo además en consideración lo atestiguado por don Daniel Alfredo Catalán Catalán, quien se encontraba en el lugar y al momento de los hechos, se tendrá por acreditado que el demandado don Carlos Troncoso Hernández, conductor profesional con licencia clase A, no conducía atento a las condiciones del tránsito, ya que sin considerar el tamaño y peso del bus que conducía, lo acercó en exceso a la ciclista que circulaba por la misma pista, botándola.



OCTAVO: Que sin bien, la demandante circulaba por una vía exclusiva y es de suma dificultad determinar si iba a efectuar una maniobra de viraje o no, lo cierto es que el hecho ocurrió aproximadamente a las 14:15 horas en una avenida altamente transitada, donde no existe ciclovía y en dicho lugar, lo más prudente para un ciclista era circular por la derecha, como en efecto lo hacía la demandante, toda vez que cualquier otra manera hubiera sido más arriesgada, debiendo considerándose además, que a la época del accidente no existía una regulación como la que contiene el actual artículo 222 de la Ley del Tránsito.

NOVENO: Que por su parte, la empresa demandada Express de Santiago Uno S.A. solicitó el rechazo de la demanda, argumentando en primer término, estar eximida de responsabilidad civil, pues según lo establecido en el artículo 169 de la Ley del Tránsito, para que la tuviera, sería necesario que previamente se hubiera dictado sentencia penal o infraccional en contra del conductor del vehículo.

DÉCIMO: Que al respecto, cabe tener presente que artículo 169 antes citado, en su inciso 2º, dispone que “El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente.”

UNDÉCIMO: Que si bien es efectivo que no consta en autos sentencia penal ni infraccional que sancione la conducta del demandado Carlos Troncoso Hernández, lo cierto es que la norma invocada por la empresa demandada lo único que establece es la responsabilidad solidaria de los que ahí se indica respecto de los daños o perjuicios que se ocasionen con el uso de un vehículo, motivo por el cual esta alegación no será oída.

DUODÉCIMO: Que en seguida, la empresa demandada afirma que no se configuran en la especie los requisitos dispuestos por el Código Civil para dar lugar a su responsabilidad civil extracontractual, refiriéndose a cada uno de ellos en forma particular.

DÉCIMO TERCERO: Que al respecto se encuentra acreditado que la empresa demandada es la propietaria del bus que ocasionó el accidente,



conducido por el codemandado Carlos Troncoso Hernández, que a esa época era su empleado y dependiente, de manera que su responsabilidad está determinada por lo previsto en el inciso 2° del artículo 169 de la Ley del Tránsito y no por las reglas del Código Civil, estatuto que, por su calidad de propietario del bus, lo hace solidariamente responsable de los daños causados a la demandante.

DÉCIMO CUARTO: Que en cuanto a la alegación de constituir el hecho de la víctima una eximente de responsabilidad, por haber circulado en una vía exclusiva, será desestimada atendido lo razonado en la motivación octavo, a la que debe agregarse que la Resolución Exenta N°462 de 28 de febrero de 2017 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que la demandada cita en apoyo de su defensa, es posterior a la ocurrencia del accidente.

DÉCIMO QUINTO: Que respecto de la alegación de caso fortuito o fuerza mayor, esta defensa tampoco será oída, toda vez que la demandada es una empresa cuyo giro principal es el transporte público de pasajeros en la ciudad de Santiago, motivo por el cual debe asumir el riesgo que de ordinario genera su actividad, sin que pueda entenderse que el accidente de autos constituya un evento que le sea imposible de prever. Por el contrario, los choques, atropellos y otros eventos relacionados con el tránsito regular ocurren en forma habitual, estando obligado a efectuar la debida mantención a los buses de su propiedad y contar con conductores aptos y prudentes.

DÉCIMO SEXTO: Que encontrándose acreditado que la demandante sufrió lesiones como consecuencia directa del accidente de tránsito ocasionado por la conducción no atenta del demandado Carlos Troncoso Hernández y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 165 y 169 de la Ley de Tránsito los demandados deberán responder de los perjuicios.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que al respecto, la actora solicita la indemnización de un daño patrimonial emergente, el que hace consistir en los gastos médicos en que debió incurrir posterior al accidente y producto de las lesiones sufridas, como también en el sufrimiento físico que experimentó.



DÉCIMO OCTAVO: Que aunque con el mérito de los informes médicos, psicológicos, policial y técnico pericial acompañados en autos, ha quedado establecido que la demandante sufrió un “traumatismo encéfalo craneano, contusión de codo, erosión de piel”, como también que posterior al accidente fue derivada a la Clínica Alemana para recibir cuidados médicos, esta no allegó prueba alguna que permita calcular el daño emergente sufrido en relación a ellos, motivo por el cual lo pedido por dicho ítem será rechazado.

DÉCIMO NOVENO: Que en cuanto al sufrimiento físico, este será valorado dentro del daño moral, por no corresponder al daño patrimonial.

VIGÉSIMO: Que por otro lado, para efectos de determinar si la demandante sufrió un daño moral, cabe tener en cuenta lo señalado en el informe psicológico de 12 de noviembre de 2021, de conformidad al cual la ocurrencia del accidente “comprometió su estado afectivo, emocional, social, académico y relacional” y a la época de su elaboración presentaba un “trastorno de ansiedad generalizado” como también episodios de crisis de pánico, particularmente al momento de subirse a una bicicleta.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que adicionalmente, resulta evidente que tratándose de una persona apenas 20 años de edad, como lo era la actora al ser embestida por el bus del Transantiago, un hecho traumático como el que vivenció acarrea consecuencias en el normal desenvolvimiento de su vida, trastornando sus labores académicas y las diversas actividades deportivas o de ocio que a esa fecha realizaba.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en nada obsta a la conclusión anterior el set de imágenes acompañado por la demandada y obtenidas desde la red social Instagram, denominado “Deporte Azul”, en las cuales se observa un grupo de jóvenes mujeres con la camiseta de la Universidad de Chile y en actividades de gimnasia artística, en la cual se encuentra “etiquetada” la demandante, cuya fecha de publicación es el 29 de octubre de 2015, ni el pantallazo de la página web del mismo nombre, en la cual se informa de la participación de la Selección de Gimnasia Rítmica de la Universidad de Chile en torneo Fenaude 2015 de 29 de octubre de 2015, toda vez que dicha prueba no permite determinar que la demandante se encontraba en condiciones óptimas de salud física y emocional a esa época y ni siquiera



dan cuenta de que participó en esa competencia con un desempeño similar al que tenía con anterioridad al accidente.

VIGÉSIMO TERCERO: Que por lo anterior, se evaluará el daño moral sufrido por la actora prudencialmente en la suma de \$7.000.000.-, que deberá ser reajustada conforme el Índice de Precios al Consumidor y ganará intereses corrientes entre la fecha de la dictación de la presente sentencia y la de su pago definitivo.

VIGÉSIMO CUARTO: Que finalmente y atendido lo prescrito en el inciso 2° del artículo 169 de la Ley N°18.290 citado, los demandados serán condenados solidariamente al pago de la indemnización antes señalada.

VIGÉSIMO QUINTO: Que por haber sido vencidos en lo esencial, los demandados serán condenados al pago de las costas de la causa.

En consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos 1557, 1698 y 2314 y siguientes del Código Civil y artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que se acoge la demanda solo en cuanto se condena a los demandados a pagar solidariamente a la demandante, la cantidad de \$7.000.000.- a título de indemnización por daño moral, suma que deberá reajustarse de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor y deberán aplicarse intereses corrientes a partir de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y hasta la de pago efectivo.

II.- Que se condena en costas a los demandados.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: ERLXFXZFJM